

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada Ponente

Ejecutivo Laboral	
EJECUTANTE	MARTHA LUZ TAMAYO PALACIO
EJECUTADO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-020-2017-00472-01
TEMA	Resolución de excepciones – prescripción de la acción.
DECISIÓN	Revoca y ordena continuar adelante con la ejecución.

Medellín, veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Esta Sala asume la competencia en esta instancia, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, y cumplido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a desatar el recurso de apelación frente a la providencia que resolvió excepciones al interior del proceso ejecutivo laboral conexo promovido por la señora **MARTHA LUZ TAMAYO PALACIO** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 052**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I.- ANTECEDENTES

Mediante proceso ejecutivo laboral conexo, la señora **MARTHA LUZ TAMAYO PALACIO**, solicita se libre **MANDAMIENTO DE PAGO** a su favor,

y en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, por los siguientes conceptos:

- 1. Por \$20.500.000, correspondiente a las costas del proceso y agencias en derecho en la primera instancia, más los intereses legales liquidados desde el 28 de junio de 2013, y hasta el pago de la obligación.*
- 2. Por las costas de este ejecutivo, las cuales se deberán liquidar con sujeción a lo dispuesto en el Acuerdo 1887 de junio de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura.*

Y como MEDIDA CAUTELAR solicitó el embargo de los dineros que COLPENSIONES tiene depositados en la cuenta de ahorro Bancolombia N° 65283208570 en cuantía suficiente para el pago de la obligación.

Mediante auto del 31 de enero de 2019 (folios 49 al 51 del expediente digital - archivo PDF 01), el JUZGADO VEINTE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, decidió LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO por los siguientes conceptos:

“PRIMERO: \$20.500.000 por concepto de costas procesales y agencias en derecho.

SEGUNDO: NEGAR los INTERESES solicitados, por las razones expresadas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Una vez en firme la liquidación del crédito, se atenderá la medida cautelar de embargo solicitada.

CUARTO: CONDÉNESE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a reconocer y pagar las costas del proceso ejecutivo.”

Notificado en debida forma auto que libró mandamiento de pago, la sociedad ejecutada a través de su apoderada judicial dio respuesta a la acción, y formuló en su defensa las excepciones de fondo que denominó: *“PRESCRIPCIÓN; PAGO; COMPENSACIÓN; e INEMBARGABILIDAD DE LAS CUENTAS DE COLPENSIONES – SOLICITUD DE DESEMBARGO”.*

II. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE ALZADA:

En audiencia pública de resolución de excepciones celebrada el 5 de mayo de 2022, la Juez Veinte Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ probada la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN formulada por la apoderada judicial de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, en consecuencia, ordenó la terminación y archivo del proceso ejecutivo laboral conexo.

Lo anterior al estimar la juez de primer grado que la parte ejecutante tardó más de 3 años en radicar la demanda ejecutiva laboral conexas, toda vez que la cuenta de cobro se presentó el día 09 de agosto de 2013, y la acción judicial apenas fue radicada el 12 de mayo de 2017, habiendo transcurrido el término prescriptivo regulado en materia laboral y seguridad social por los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS, no habiendo lugar a la suspensión de la prescripción pues esta figura no se encuentra regulada en el procedimiento laboral y seguridad social, según lo adoctrinado por la jurisprudencia del órgano de cierre en la sentencia SL9373 de 2017.

III. RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión de primer grado, la apoderada judicial de la parte ejecutante presentó recurso de apelación, oponiéndose a la prosperidad de excepción de prescripción propuesta por la entidad ejecutada, insistiendo en la suspensión de la prescripción, pues considera que desde la fecha en que se radicó la reclamación administrativa (9 de agosto de 2013) y la fecha de notificación de la resolución N° GNR 342778 del 1° de octubre de 2014 (8 de octubre de 2014), que decidió parcialmente sobre la solicitud de cumplimiento de la sentencia, el término prescriptivo estaba en suspenso, y por ello los 3 años a los que aluden los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS iban hasta el 8 de octubre de 2017.

También expone la recurrente que la problemática relativa a la suspensión del término prescriptivo quedó definida en la sentencia SL-431 de 2020 (Rad. 76537).

Señala que el requisito de procedibilidad que establece el aludido artículo 6° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social opera para cualquier tipo de acción contenciosa (ordinaria o ejecutiva) que se ejerza contra cualquier entidad pública, y en ese sentido el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo, en lo que respecta al cumplimiento de sentencias por parte de estas entidades, dispone que el beneficiario debe presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada cuando la condena impuesta consista en el pago o devolución de una suma de dinero, y conforme a la sentencia C-792 de 2006, si se decide esperar la respuesta de la Administración, la contabilización del término de prescripción sólo se hará a partir del momento en que la respuesta efectivamente se produzca. Motivos por los cuales solicita la revocatoria de la providencia impugnada, y en su lugar se continúe con la ejecución de la condena en costas procesales.

Alegatos de conclusión:

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la apoderada judicial de COLPENSIONES, Dra. Francy Lorena Pérez Cuellar, solicita se confirme la decisión de primer grado, al considerar que la misma se encuentra ajustada a derecho y a la normatividad que regula el fenómeno de la prescripción en materia laboral y seguridad social.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

Desatará la Sala el recurso de alzada interpuesto por la apoderada judicial de la parte ejecutante, al tratarse de una providencia susceptible del recurso de alzada, al tenor de lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 65 del CPTSS.

La cuestión jurídica a dirimir en esta instancia judicial, se circunscribe a resolver si en el presente asunto esta o no llamada a operar la excepción de

prescripción de la acción propuesta por la apoderada judicial de COLPENSIONES.

Para ello, debe recordarse que en el presente asunto se pretende el cobro coactivo de unas obligaciones laborales, concretamente una condena en costas procesales ordenada en la sentencia del 20 de mayo de 2013 proferida por el Juez Adjunto al Juzgado Veinte Laboral de Oralidad del Circuito de Medellín, liquidadas mediante auto del 27 de mayo de 2013, y declaradas en firme mediante auto del 24 de junio de 2013 (fls. 30-31, 34, y 36 expediente digital – archivo pdf 01).

Obligaciones que se hicieron exigibles al configurarse la ejecutoria de estas providencias, en los términos el art. 302 del Código General del Proceso, veamos:

“ARTÍCULO 302. EJECUTORIA. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.

No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.

Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos”.

Significa lo anterior, que la última de las providencias cuyo cobro coactivo se persigue, quedó ejecutoriada el día 28 de junio de 2013, teniendo en cuenta que su notificación se dio por ESTADOS del 25 de junio de 2013.

Ejecutoriada entonces la providencia contentiva de las obligaciones, la parte que salió favorecida con la misma quedaba facultada para solicitar su ejecución en los términos del art. 306 del Código General del Proceso, veamos:

“...ARTÍCULO 306. EJECUCIÓN. Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que

no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutive de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior.

(...)”

Solicitud de ejecución que debía presentarse de manera oportuna, es decir, antes que transcurriese el término de 3 años al que aluden los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS, para evitar con ello la prescripción extintiva en materia de derechos sociales. Al tenor de dichas disposiciones, estableció el Legislador:

“Artículo 488 CST. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto”.

y

“Artículo 151 CPT y SS. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual”.

Disposiciones que determinan la extinción del derecho desde su concepción sustancial y la acción desde la óptica procedimental, en el término de tres años. Tal justificación ha sido acogida por las altas corporaciones jurisprudenciales; verbi gracia, la Corte Constitucional en la sentencia C-072 de 1993, sentencia de constitucionalidad en la que se analizó la conformidad a la carta de las dos disposiciones normativas citadas, expresó que “*el núcleo esencial del derecho al trabajo no se desconoce, por el hecho de existir la prescripción de la acción laboral concreta. El núcleo esencial del derecho al trabajo no solo está*

incólume, sino protegido, ya que la prescripción de corto plazo, en estos eventos, busca mayor prontitud en el ejercicio de la acción, dada la supremacía del derecho fundamental, el cual comporta la exigencia de acción y protección oportunas”.

La teleología que subyace a la existencia de la prescripción extintiva, se inspira en razones de orden público y paz social, como valores en los cuales la sociedad se encuentra interesada, a fin de que se consoliden las situaciones jurídicas sobre los derechos, y se genere la lógica consecuencia de la extinción cuando el titular de un derecho ha estado demasiado tiempo sin ejercitarlo.

Tal postura goza de una pacífica aceptación en la jurisdicción laboral, a partir de los reiterados pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que ha sostenido que *“en asuntos judiciales de carácter social, el término de prescripción es de 3 años, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 448 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”* (sentencia 27.365 del 19 de octubre de 2006).

CASO CONCRETO

En el presente caso, observa la Sala que la parte ejecutante presentó cuenta de cobro ante COLPENSIONES el día 9 de agosto de 2013, solicitando el cumplimiento de la sentencia de fecha 20 de mayo de 2013, y las condenas allí contenidas relativas a intereses moratorios y costas procesales, así se aprecia a folios 42 del expediente digital – archivo PDF N° 01.

Para dar cumplimiento, la entidad ejecutada profirió la resolución N° GNR-342778 del 1° de octubre de 2014, mediante la cual se allanó parcialmente, disponiendo únicamente el pago de intereses moratorios, pero dejando insoluta la condena por costas procesales (\$20.500.000), veamos:

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Dar cumplimiento al fallo judicial proferido por JUZGADO VEINTE LABORAL DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE MEDELLIN JUEZ ADJUNTO el 15 de mayo de 2013 y en consecuencia, reconocer a favor del (a) señor (a) TAMAYO PALACIO MARTHA LUZ, ya identificado (a), unos intereses moratorios, en los siguientes términos y cuantías:

Valor mesada a 1 de octubre de 2014 = \$2,412,617

LIQUIDACION RETROACTIVO	
CONCEPTO	VALOR
Mesadas	0.00
Mesadas Adicionales	0.00
F. Solidaridad Mesadas	0.00
F. Solidaridad Mesadas Adic	0.00
Incrementos	0.00
Indexación	0.00
Intereses de Mora	0.00
Descuentos en Salud	0.00

Pagos ordenados Sentencia	136,723,774.00
Pagos ya efectuados	0.00
Valor a Pagar	136,723,774.00

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente prestación junto con el retroactivo si hay lugar a ello, será ingresada en la nómina del periodo 201410 que se paga en el periodo 201411, en la misma entidad bancaria en la cual viene cobrando la mesada pensional.

El referido acto administrativo, le fue notificado a la apoderada judicial de la ejecutante el día 8 de octubre de 2020, según se aprecia a folios 47 del expediente digital – archivo PDF N° 01.

Así las costas, estima la Sala que le asiste razón a la recurrente, pues en realidad la parte ejecutante solo tuvo conocimiento del no pago de la condena en costas procesales, el día en que le fue notificada la resolución GNR-342778 del 1° de octubre de 2014, y por ello era a partir de ese momento que debía comenzarse a computar el término trienal de prescripción al que aluden los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS.

En efecto, solo a partir del 8 de octubre de 2014, la ejecutante quedaba habilitada para reclamar la condena en costas procesales otorgadas en la primera instancia, y no porque fuese necesario un agotamiento de la reclamación administrativa en este sentido, es decir, entendida esta reclamación como un requisito de procedibilidad previo a la presentación de la acción ejecutiva laboral conexa, pues tal exigencia solo aplica frente al proceso ordinario laboral, sino

porque la notificación de la respuesta brindada por la entidad, constituye en sí misma, la fecha de exigibilidad de la obligación, pues no era dable exigirle a la ejecutante que formulare una acción judicial sin saber si se le iban a pagar o no la costas procesales.

En consecuencia, y dado que la demanda ejecutiva laboral conexa se presentó el día **12 de mayo de 2017**, según consta a folios 40 del expediente digital – archivo PDF N° 01, es evidente para la Sala, que no alcanzó a transcurrir el término trienal de prescripción ya analizado, y contabilizado desde el 8 de octubre de 2014.

Motivos por los cuales habrá de revocarse lo resuelto en cuanto a la prosperidad de esta excepción, y en su lugar ordenar al juez de primer grado a continuar con la ejecución, imprimiéndole el trámite procesal correspondiente.

Sin costas en esta instancia, al haber prosperado el recurso de apelación formulado por la apoderada judicial de la parte ejecutante.

V. D E C I S I Ó N

El Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral,

R E S U E L V E:

Primero: REVOCAR la providencia de fecha 4 de mayo de 2022, proferido por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, en cuanto declaró probada la excepción de prescripción, y ordenó la terminación y archivo del proceso ejecutivo laboral conexo, para en su lugar DECLARAR improbada la referida excepción, y ordenar continuar con la ejecución, según lo expuesto en procedencia.

Segundo: Sin Costas en esta instancia.

Tercero: Se ordena notificar lo resuelto en **ESTADOS** virtuales y la devolución del expediente al juzgado de origen.

Los magistrados


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N°
214 del 28 de Noviembre de 2022.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>.